

Imprimir

El mendaz, fatuo e infantil presidente saliente de Colombia, Iván Duque Márquez, hizo con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, prácticamente lo que “le vino en gana”. Se opuso y atacó a la JEP y a las 16 curules de paz; permitió el desvío de millones de pesos que debieron invertirse en los 170 municipios PDET’s y en proyectos productivos de los excombatientes; ralentizó las acciones propias de la implementación de lo acordado en Cuba entre el Estado y las entonces Farc-Ep. Además, se burló en la cara de la comunidad internacional y en particular en la de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a quienes les habló de su política *Paz con legalidad*, una suerte de embeleco jurídico y político con el que trató de encubrir su animadversión hacia lo pactado en la isla caribeña y el saqueo programado de los recursos de la paz. Fue su manera de negarse a aceptar el tratado de paz, convertido en política pública de paz de Estado, lo que lo obligaba a cumplir con el contenido de lo allí consignado. Y de contera, elevó a los jóvenes que protestaron durante el estallido social, a la condición de “enemigo interno”. Violó la constitución y se extralimitó en sus funciones y poderes. Y todo lo anterior, lo hizo con el beneplácito de su jefe político, prácticamente su dueño, el imputado, Álvaro Uribe Vélez, y de gran parte de la sociedad y de agentes económicos de la sociedad civil.

Duque y sus áulicos convirtieron el proceso de paz en un negocio. Duque pagó favores políticos como lo hizo en su momento Uribe con los millonarios recursos de la política Agro Ingreso Seguro. De esa forma el hijo de Salgar agradeció a familias ricas de la costa Caribe y a los ingenios azucareros del Valle del Cauca el haber apoyado su reelección presidencial. Iván Duque, en su infantil forma de ser, siempre quiso emular a su ídolo, el 1087985.

Mientras que millones de colombianos vieron y asumieron el proceso de paz como una oportunidad para atacar las circunstancias históricas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, Duque, en representación de la mezquina y corrupta derecha que lo impuso en el solio de Bolívar, lo asumió como un dispensador de recursos económicos, que le sirvieron al propósito estratégico de la derecha de mantener los niveles históricos de la pobreza rural, hacer inviable la vida de los campesinos y las de las comunidades ancestrales, extender en el tiempo la inequidad y continuar concentrando la tierra en pocas manos y especulando con su precio.

De esa manera, para el hoy alicaído uribismo, tanto la paz como la guerra son solo negocios. No son más. A Uribe y a todos sus seguidores con alma de borregos, poco o nada les importan las víctimas, el sufrimiento y la reconciliación. Muy seguramente, con la paz, se beneficiaron solo civiles, mientras que durante los aciagos ocho años de la seguridad democrática, fueron los militares quienes mayor beneficio sacaron de las hostilidades y de las dinámicas de lo que se conoce como el conflicto armado interno. En especial, altos oficiales que tuvieron acceso a contratos y al manejo discrecional de los recursos que el Estado les entrega a las fuerzas armadas. La paz y la guerra para el uribismo son dos caras de una misma moneda, pues con esta siempre ganaron.

Con el nuevo gobierno, se espera que la implementación de lo acordado se acelere y que se den las transformaciones que requieren los municipios que más sufrieron las arremetidas de los actores armados, legales e ilegales. La actual estructura agraria en municipios PDET debe tocarse, si se quiere cumplir con el punto de la reforma agraria integral.

Los desafíos del gobierno entrante son colosales. Petro y sus ministras de agricultura, ambiente y cultura tienen el reto de poner a hablar al país de Sostenibilidad Cultural como imán al que se conectan de manera asertiva perspectivas de la sostenibilidad como la económica, la política, la ecológica y ambiental. Estas tres mujeres deben sentarse a dialogar en torno a ese concepto de la Sostenibilidad Cultural, por una razón fundamental: el ethos mafioso que Uribe logró naturalizar en Colombia se hizo transversal y sistémico, lo que claramente significó su penetración en la gestión ambiental y en las dinámicas institucionales creadas para alcanzar la dichosa sostenibilidad. Así, el uribismo validó la deforestación, la ganadería extensiva de baja productividad, a lo que se suma, los proyectos insostenibles de megaminería, legal e ilegal. En términos socio ambientales, de una ética ecológica y de la sostenibilidad cultural, el uribismo fue, es y será siempre insostenible. Todo un riesgo para la vida en todas sus manifestaciones.

Germán Ayala Osorio

Foto tomada de: Conexión Capital